



RESOLUCIÓN No. SSPD - 20144010022565 DEL 24/06/2014

POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO,

en ejercicio de las atribuciones conferidas en el parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007 y en el artículo 8° del Decreto 1040 de 2012 y

CONSIDERANDO:

I. ANTECEDENTES

Que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD, de conformidad con lo previsto en el Parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, mediante la cual *"se desarrollan los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones"*, es la entidad competente para adelantar el proceso de certificación relacionado con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones o de retirarla, según sea el caso, a los distritos y municipios para asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico.

Que el artículo 8° del Decreto 1040 de 2012, por medio del cual se reglamentó la Ley 1176 de 2007, estableció que *"La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios adelantará el proceso de certificación de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 1176 de 2007. Para estos efectos, verificará que los municipios y distritos hayan dado cumplimiento a los requisitos que se establecen en el artículo 9 del presente decreto y 10 para el caso de los prestadores directos de alguno de los servicios de acueducto, alcantarillado y/o aseo, en el año calendario inmediatamente anterior."*

Que la Superintendente de Servicios Públicos, mediante Resolución No. SSPD 20111300032265, del 21 de octubre de 2011 delegó en el Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, entre otras funciones, la de expedir los actos administrativos mediante los cuales se decida sobre la certificación de municipios relacionada con la administración de los recursos del SGP-APSB a que se refiere el parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, en concordancia con los decretos 1040 de 2012 y 1639 de 2013; resolver los recursos que contra ellos se presenten y en general la de ejercer todas las actuaciones previstas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo C.P.A.C.A., para adelantar los procedimientos administrativos.

Que el municipio de PADILLA, del departamento de CAUCA, es de categoría 6 y como prestador directo de los servicios de aseo a 31 de diciembre de 2012, para obtener la certificación relacionada con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico, debía acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 3° y 5° del Decreto 1639 de 2013.

II. DE LA RESOLUCIÓN DE DESCERTIFICACIÓN

Que mediante Resolución No. SSPD 20144010006525, del 13 de marzo de 2014, la SSPD decidió DESCERTIFICAR al municipio de PADILLA, departamento de CAUCA, por no haber cumplido los siguientes criterios previstos en los artículos 3° y 5° del Decreto 1639 de 2013:

- a) Reporte al SUI de la suscripción de los contratos en la zona urbana a que se refiere el artículo 99.8 de la Ley 142 de 1994 y el artículo 11 del Decreto número 565 de 1996 o las normas que los modifiquen, complementen o sustituyan, o alguno de los siguientes documentos que soporten:
- Giro directo al prestador o prestadores de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.
 - Giro de recursos al prestador o prestadores de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo a través del esquema fiduciario constituido en el marco del PAP-PDA.

- Certificación emitida por el prestador o prestadores de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en donde certifique el monto del giro de los recursos destinados al pago de los subsidios.
- Reporte al FUT en la categoría de gastos de inversión el compromiso de subsidios.

b) Reporte al SUI del Acuerdo Municipal de aprobación de los porcentajes de subsidio y aporte solidario de acueducto, alcantarillado y aseo para la vigencia respectiva, el cual deberá estar expedido de conformidad con la Ley 1450 de 2011 o la norma que la modifique, complemente o sustituya. En caso de no poder acreditar el criterio de la forma descrita, podrá:

- Reportar en el SUI el formato Balance Subsidios y Contribuciones de la vigencia a certificar, o,
- Reportar en el FUT en la categoría gastos de inversión el pago por concepto de subsidios en la vigencia a certificar.

c) Reporte al SUI del agotamiento del procedimiento previsto en el artículo 6° de la Ley 142 de 1994 mediante:

1. Invitación pública dirigida a empresas de servicios públicos para que presenten ofertas para la prestación de los servicios públicos (numeral 6.1) y a otros municipios, al Departamento, a la Nación y otras personas públicas o privadas, para organizar una empresa de servicios públicos (numeral 6.2).
2. Documento en que conste que se realizó la publicación de las invitaciones establecidas en los numerales 6.1 y 6.2 del artículo 6° de la Ley 142 de 1994.
3. Certificación en la que conste que no hubo empresas de servicios públicos o personas públicas o privadas interesadas en la prestación de los servicios ni en la organización de una empresa de servicios públicos en el municipio.

d) Reporte al SUI del formato Acto de Aprobación de Tarifas, expedido antes de la fecha máxima de cargue para la certificación de la respectiva vigencia, según los servicios prestados, de conformidad con la normatividad expedida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios relacionada con el cargue de información al sistema.

2.1 Notificación de la Resolución No. SSPD 20144010006525 del 13 de marzo de 2014.

Para efectos de notificar la Resolución No. SSPD 20144010006525, del 13 de marzo de 2014, se envió citación al señor alcalde del municipio de PADILLA, del departamento de CAUCA, mediante el oficio No. SSPD 20144010138531, del 13 de marzo de 2014, enviado por correo certificado el 19 de marzo de 2014, advirtiéndole que en caso de no comparecer personalmente, se notificaría la decisión mediante aviso conforme lo dispone el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.

Transcurrido el término para que el representante legal del ente territorial compareciera a notificarse personalmente del contenido de la Resolución No. SSPD 20144010006525, sin que ello ocurriera, se procedió a enviar el respectivo aviso de notificación mediante el oficio No. SSPD 20144010173781. De acuerdo a la información remitida por la empresa SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. este documento fue entregado el 03 de abril de 2014 en la Alcaldía Municipal, por lo tanto y de conformidad con el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, la notificación se considera surtida al día siguiente de su entrega en el lugar de destino.

Ahora bien, el señor ARMANDO MINA MENA, en su calidad de alcalde del municipio de PADILLA, del departamento de CAUCA, mediante documento radicado en esta entidad bajo el número SSPD 20145290168442, del 07 de abril de 2014, presentó recurso de reposición contra la Resolución No. SSPD 20144010006525.

III. DEL RECURSO DE REPOSICIÓN

3.1 Verificación de los requisitos de forma

El artículo 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establece que, para efectos de ser admitidos y resueltos; los recursos de reposición deben interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido, sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad e indicar el nombre y la dirección del recurrente.

De conformidad con lo anterior, revisado el escrito de reposición se observa que este fue presentado por el alcalde del municipio de PADILLA, del departamento de CAUCA, quien de conformidad con el artículo 314 de la C.P. es considerado el representante legal y por lo tanto era el funcionario competente para interponerlo, además se confirma que fue presentado dentro del término legal, que en él se sustentan de forma concreta los motivos de inconformidad y se indicó la dirección para efectos de recibir notificaciones.

Según lo expuesto, el escrito radicado con el No. SSPD 20145290168442, reúne los requisitos exigidos por el Artículo 77 del C.P.A.C.A., por lo tanto se procederá a efectuar el análisis de fondo del recurso.

3.2 Argumentos del recurrente

Como argumentos del recurso, se alegaron los siguientes por parte del alcalde municipal:

* 2.1. PARA EL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.

En cuanto al punto 2.1.1., el municipio (sic) se permite aclarar que dicha información correspondiente a la vigencia fiscal 2012, se subió en el mes de marzo (sic) de 2014 y el número de convenio es 001 de 2012.

En el punto 2.1.2., el Gerente de la Empresa de Acueducto y alcantarillado de Padilla Cauca expide certificación de fecha 30 de Abril de 2014, de acuerdo a la normatividad vigente, por medio de la cual se acredita que recibió por parte del municipio(sic) de Padilla por concepto de transferencias para el pago de subsidios de los servicios de acueducto (sic) y alcantarillado de Padilla Cauca (sic) EMPADILLA E.S.P. al fondo de Redistribución de Ingresos para el año 2012 por un valor de CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS (\$ 56.824.000.00). En este punto, si bien es cierto que se realizó, según ustedes por la persona que no se debía, pero la Tesorera Municipal, al ser la persona encargada del giro de los recursos del SGP, razón por la cual a nuestro parecer, dicha certificación cumple con el objetivo primordial, que era establecer el monto real de los recursos girados por dicho concepto, además se anexa certificación expedida por el Gerente de EMPADILLA ESP, por medio de la cual certifica que el valor certificado por la señora tesorera si fue girado a esta entidad en la vigencia fiscal 2012.

En cuanto al punto 2.1.3. literal A) Nos permitimos aclarar que este formato no aplica para el municipio (sic), puesto que nunca se autorizó el giro directo de los recursos. B) De igual manera no aplica por lo mismo que el punto anterior. C) El Municipio de Padilla (Cauca), reportó al FUT en la categoría de gastos de inversión el compromiso de subsidios, tal como lo hace constar los cuadros de Excel y el pantallazo anexo.

2.2. COMO PRESTADOR DIRECTO DEL SERVICIO DE ASEO:

El punto 2.2.1., se anexa nuevamente certificación expedida por la Tesorera Municipal donde detalla mes a mes el valor que asume por el servicio de aseo, el cual proviene del fondo de solidaridad y redistribución del SGP.

El punto 2.2.2., consideramos que al Ente Municipal no le aplica este punto, pues al ser prestador directo del servicio de aseo no puede hacerse giro directo, ni mucho menos por esquema fiduciario, y por ende al ser prestador directo asumimos todo el costo del servicio de aseo.

4.1., En el punto Ustedes manifiestan que el Acuerdo Municipal No 018 del 20 de Junio de 2011, no establece su vigencia, pero desde el punto de vista jurídico, el referido acto administrativo reza en su artículo quinto "este acuerdo rige desde la fecha de su publicación y modifica o deroga normas de igual categorías que le sean contrarias", dicho acto administrativo fue modificado por el Acuerdo No 016 de 2013, igualmente, nos permitimos informar que en el corriente mes de Marzo se presentó el proyecto de acuerdo "por medio del cual se establecen los factores de subsidios y contribuciones a las tarifas de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en el Municipio de Padilla".

Cabe aclarar que la Corporación Concejo Municipal adopto dichos subsidios, razón por la cual esa es la autonomía que tiene dentro de sus facultades el Concejo Municipal.

punto 4.2., el formato balance subsidios y contribuciones vigencia 2012 para los servicios de aseo, no se encuentra habilitado, esto debido a que el servicio de aseo no es subsidiario, lo cual hace irrisoria esta consideración por parte de la SSPD.

Por todo lo anterior y teniendo en cuenta que el Municipio ha cumplido en gran parte con todos y cada uno de los informes y no entendemos la razón por la cual la SSPD establece en varias de las consideraciones que no se reportó al FUT, si tal como lo pueden constatar en la página de la Contraloría General de la República en el aplicativo CHIP, se subieron dichos reportes.

RESPECTO DE LOS CRITERIOS ADICIONALES PARA LOS PRESTADORES DIRECTOS SE ENCONTRÓ QUE:

En cuanto al punto 1, igualmente nos permitimos precisar, que el agotamiento del artículo 6 de la Ley 142 de 1994, el Municipio de Padilla lo realiza mediante solicitudes escritas a cada uno de los Municipios vecinos, para que se sirvieran indicar si estaban en la capacidad de prestarnos el servicio de aseo, a lo cual cada uno de los mismos certifico que no era posible, esto debido a que no contaban con la capacidad para prestarnos el servicio de aseo, y entendiendo la cantidad de

problemas que hemos tenido en el Municipio, suponemos que estas certificaciones son válidas como la convocatoria realizada a diferentes Empresas prestadoras de los servicios públicos.

Cabe aclarar que el Concejo Municipal mediante el Acuerdo No 003 por medio del cual autoriza al señor Alcalde Municipal transferir el servicio de aseo y sus actividades conexas a EMPADILLA E.S.P., razón por la cual, el Municipio inicio dicha transferencia a la citada empresa, el cual se puede verificar que efectivamente se llevó a cabo, pues a partir del 1 de Julio de 2013 EMPADILLA ESP, registra inicio como prestador del servicio de aseo.

En cuanto al punto 2, el Municipio cargo la aplicación tarifaria como tarifa contractual, debido a que no existe una tarifa fija, la tarifa que se subió con corte a 31 de Diciembre de 2012 era de \$ 1.874, información que se cargó el día 16 de Febrero de 2014.

También, es bueno determinar que a la fecha el Municipio de Padilla ha cumplido con todos y cada uno de los requisitos exigidos por ustedes para la certificación del Municipio.

Por estas breves consideraciones solicito de manera comedida reponer la resolución mencionada en la referencia del presente recurso y proceder de conformidad."

3.3. De las pruebas relacionadas en el recurso.

Con el documento radicado con el No. SSPD 20145290168442, del 7 de abril de 2014, por medio del cual se sustentó el recurso de reposición, se allegaron las siguientes pruebas:

3.3.1. Certificación del alcalde municipal de Padilla, en el que hace constar que en la vigencia 2012 no se definió por decreto las tarifas para el servicio de aseo, puesto que se inició el proceso de traspaso del servicio a la Empresa de servicios Públicos de Padilla – EMPADILLA, que tiene como fecha de inicio de operaciones el 1 de julio de 2013 para el servicio de aseo.

3.3.2. Solicitud de prestación de servicios de recolección, transporte y disposición final del servicio de aseo del gerente de EMVILLARICA, del 22 de junio de 2012, dirigida al alcalde municipal de Padilla.

3.3.3. Oficio del 4 de julio de 2012, en el que el alcalde del municipio atiende la solicitud señalada en el numeral anterior, en el sentido de no acceder a la misma.

3.3.5. Oficios de julio de 2012, de las empresas EMCORINTO E.S.P. E.I.C.E. y ASEPUERTO S.A. E.S.P. donde manifiestan que no pueden asumir a prestación de recolección, transporte y disposición final del servicio de aseo en el municipio de Padilla.

3.3.6. Certificación de la empresa EMPADILLA E.S.P. sobre el valor de los giros recibidos por el municipio para el pago de subsidios del 2012, para los servicios de acueducto y alcantarillado.

3.3.7. Cinco pantallazos de la categoría gastos de inversión del FUT, del municipio de PADILLA.

3.3.8. Certificación del gerente de la empresa EMPADILLA E.S.P. sobre la aplicación del Acuerdo No. 018 del 20 de junio de 2011, en la vigencia 2012.

3.3.9. Certificación de la tesorera municipal sobre el giro de subsidios de la vigencia 2012 para el servicio de aseo al municipio de Padilla, para la inversión en la prestación del servicio.

3.3.10. Dos pantallazos del reporte de información en la página www.chip.gov.co.

Los anteriores documentos, en su valor integral, se anexan al expediente.

IV. ANÁLISIS DE FONDO

Para determinar si le asiste razón a la parte recurrente, esta superintendencia procederá a analizar los argumentos expuestos en el escrito de reposición, lo cual efectuará de la siguiente manera:

4.1. Argumentos expuestos sobre el cumplimiento del requisito relacionado con el funcionamiento del FSRI.

Al respecto, señala el recurrente que para los servicios de acueducto y alcantarillado reportó en marzo de 2014 el convenio No. 001 de 2012, allegó la certificación del gerente de la empresa EMPADILLA E.S.P. sobre el giro de subsidios correspondientes al 2012. En cuanto al servicio de aseo, el recurrente señala que la tesorera municipal era la encargada de certificar los giros de subsidios y por ello considera que el documento reportado en el formato "Certificación asignación recursos FRSI PDF" del SUJ, cumple con lo

solicitado en este criterio, así mismo allega certificación de los giros de subsidios realizados al municipio como prestador directo de aseo en el 2012. Finalmente, señala que cumplió con el reporte en el FUT del compromiso de subsidios.

Al respecto, esta entidad le aclara al recurrente que el artículo 4° del Decreto 565 de 1996, que reglamentó el artículo 89 de la Ley 142 de 1994, señaló que: "Los Fondos de Solidaridad y Redistribución de Ingresos, que de acuerdo con la Ley 142 de 1994 deben constituir los concejos municipales y distritales y las asambleas, serán cuentas especiales dentro de la contabilidad de los municipios, distritos y departamentos, a través de las cuales se contabilizarán exclusivamente los recursos destinados a otorgar subsidios a los servicios públicos domiciliarios".

Dentro de cada Fondo creado se llevará la contabilidad separada por cada servicio prestado en el municipio o distrito y al interior de ellos no podrán hacerse transferencias de recursos entre servicios" (subrayado fuera del texto original).

Además, el citado Decreto en su artículo 7° señala que: *"Las entidades prestadoras de los servicios públicos domiciliarios deberán llevar cuentas detalladas de las sumas recaudadas y de las recibidas por transferencias de otras entidades con destino a los Fondos de Solidaridad y Redistribución de Ingresos, y de su aplicación."*

Debido a que el municipio es el mismo prestador del servicio público de aseo, para acreditar el cumplimiento de éste criterio debía reportar el contrato o convenio para el giro de subsidios de los servicios de acueducto y alcantarillado y la certificación de la tesorera municipal donde constara el giro de los recursos de subsidios del 2012, del FSRI al MUNICIPIO DE PADILLA, CAUCA, para el servicio de aseo. Revisado el SUI, se encontró que:

- El formato "CONVENIOS DE GIRO DE RECURSOS AL FSRI" de los servicios de acueducto y alcantarillado, de la vigencia 2012 fue reportado hasta el 6 de marzo de 2014, tal como se puede evidenciar a continuación:

Alcaldía	80408	ALCALDIA CAUCA - PADILLA	Acueducto	Información Administrativa 2012 Anual y Financiera	1	9. Convenios de Giro de Recursos al FSRI - Acueducto	Formularios CERTIFICADO	RESOLUCION SSPD No. 20094000015085 de 2009	2014-03-06
Alcaldía	80408	ALCALDIA CAUCA - PADILLA	Alcantarillado	Información Administrativa 2012 Anual y Financiera	1	Convenios de Giro de Recursos al FSRI - Alcantarillado	Formularios CERTIFICADO	RESOLUCION SSPD No. 20094000015085 de 2009	2014-03-06

Al respecto, el Decreto 1639 de 2013 estableció requisitos de carácter formal para obtener la certificación de los recursos del Sistema General de Participaciones, conforme a lo señalado en el artículo 7° de la citada disposición, la información requerida debía ser reportada al SUI a más tardar el 30 de agosto de 2013.

Pues bien, partiendo de que la anterior es una norma procesal y que de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 1564 de 2012, según el cual, *"Las normas procesales son de orden público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ningún caso podrán ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorización expresa de la ley"*.

Al respecto, la Corte Constitucional se ha pronunciado así: *"Pues bien, nótese cómo las leyes de estirpe procesal son de orden público y en consecuencia de obligatoria observancia. Sus dictados entonces, son ajenos al querer de los individuos: particulares y funcionarios llamados a aplicarlas."*, además advierte que: *"(...) En efecto, ha de repetirse, que la condición de normas taxativas que caracteriza las leyes que rigen los procedimientos es de inexorable acatamiento, máxime cuando estas normas constituyen un presupuesto para la realización de la justicia como valor superior del sistema normativo."* y concluye señalando: *"En este orden, los términos procesales se hacen tan imperativos que su cumplimiento, es una manifestación de uno de los principios sobre los cuales reposa el derecho procesal. Se trata del principio de la preclusión o de la eventualidad, el cual consiste en la clausura de las actividades que pueden llevarse a cabo dentro de cada etapa del proceso."*

"(...)Lo anterior, por cuanto el señalamiento de términos judiciales con un alcance perentorio, no sólo preserva el principio de preclusión o eventualidad sino que, también, permite, en relación con las partes, asegurar la vigencia de los principios constitucionales de igualdad procesal y seguridad jurídica, ya que al imponerles a éstos la obligación de realizar los actos procesales en un determinado momento, so pena de que precluya su oportunidad, a más de garantizar una debida contradicción, a su vez, permite otorgar certeza sobre el momento en que se consolidará una situación jurídica."

1 Corte Constitucional. Sentencia T - 213 del 28 de febrero 2008. MP Doctor Jaime Araújo Rentería

Así las cosas, como sucedió en este caso, era indudable que al dejarse vencer el término señalado en el artículo 7° del Decreto 1639 de 2013, para reportar la información en el SUI, la única decisión viable que podía tomar esta superintendencia consistía en descertificar al municipio de PADILLA.

Dado que la norma es clara en señalarle al alcalde el deber de asumir unas cargas procesales, que, si no cumple con ellas, le es aplicable la consecuencia procesal que el ordenamiento jurídico prevé para tales casos, esto es, la prevista en el artículo 5° de la Ley 1176 de 2007, reglamentado por el Decreto 1040 de 2012, según la cual, si la entidad territorial que es sujeto del proceso de certificación, no hubiera reportado la información señalada en el Decreto 1639 de 2013, debe entenderse que pierde la administración de los recursos del SGP-APSB y la competencia para asegurar la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo.


- El formato "CERTIFICACIÓN ASIGNACIÓN DE RECURSOS FSRI PDF", fue reportado en el SUI el 6 de junio de 2013, para el servicio de aseo, con el siguiente documento:

LA SUSCRITA TESORERA MUNICIPAL DE PADILLA CAUCA

CERTIFICA

Que para el año fiscal 2012 la Administración Municipal tuvo erogaciones por concepto de la prestación del servicio de aseo por valor de CIENTO NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MCTE (\$109.273.479,00), los cuales fueron utilizados en la atención de las gastos y costos de recolección, transporte, disposición final, barrido y limpieza de calles y zonas de uso público.

En constancia se firma en el despacho de la Tesorería Municipal de Padilla Cauca, a los Ocho (08) días del mes de Mayo de Dos Mil Trece (2013).


MONICA MARÍA MUÑOZ MEJÍA
 Tesorera Municipal

Como se puede evidenciar, la certificación de la tesorera municipal de Padilla no señala el giro de los recursos de subsidios del FSRI al Municipio de Padilla como prestador directo del servicio de aseo, tal como lo señala el Decreto 1639 de 2013. No obstante lo anterior, el recurrente allegó con el recurso de reposición el siguiente documento:

LA SUSCRITA TESORERA MUNICIPAL DE PADILLA CAUCA

CERTIFICA

Que revisada la información que reposa en los libros presupuestales del Municipio de Padilla Cauca, para la vigencia fiscal 2012, se verificó que el MUNICIPIO DE PADILLA CAUCA, invirtió en la prestación del servicio de aseo los recursos provenientes del FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DE INGRESOS los siguientes recursos:

MES	AÑO	ASEO	VALOR TOTAL	FECHA DE PAGO.
Enero	2012	0	0	
Febrero	2012	18.506.190	18.506.190	28/02/2012
Marzo	2012	4.557.568	4.557.568	31/03/2012
Abril	2012	10.349.450	10.349.450	30/04/2012
Mayo	2012	13.256.812	13.256.812	31/05/2012
Junio	2012	4.238.174	4.238.174	30/06/2012
Julio	2012	8.411.611	8.411.611	31/07/2012
Agosto	2012	5.199.154	5.199.154	31/08/2012
Septiembre	2012	5.535.706	5.535.706	30/09/2012
Octubre	2012	1.757.655	1.757.655	31/10/2012
Noviembre	2012	223.900	223.900	30/11/2012
Diciembre	2012	2.659.636	2.659.636	31/12/2012
TOTALES		74.895.856	74.895.856	

En constancia de lo anterior se firma en Padilla Cauca, los cuatro (04) días del mes de abril de (2014).

Por lo tanto, se observa que el ente territorial efectuó acciones encaminadas a acreditar oportunamente este requisito; por lo tanto y partiendo de tales actuaciones, se considera procedente entra a estudiar de fondo la certificación en mención y determinar si cumple con los requerimientos exigidos para el presente caso.

Así las cosas, al analizar el documento expedido el 4 de abril de 2014, que fue aportado con el recurso de reposición, se verificó que la certificación fue expedida por la tesorera municipal; así mismo en ella se verifica el traslado contable de los recursos de subsidios, correspondientes al 2012, para el servicio de aseo, del FSRI al MUNICIPIO DE PADILLA, como prestador directo de dicho servicio. Hay que tener en cuenta que hasta aquí, el municipio no ha demostrado el cumplimiento del funcionamiento del FSRI para los servicios de acueducto y alcantarillado.

Ahora bien, el Decreto 1639 en mención, señaló información subsidiaria, con la cual el municipio podía cumplir éste criterio, sin embargo, revisada la misma se concluyó que el municipio:

- No tenía giro directo al prestador o prestadores de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.
- No tenía giro de recursos al prestador o prestadores de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo a través del esquema fiduciario constituido en el marco del PAP-PDA.
- No reportó en el SUI, la certificación emitida por el prestador o prestadores de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en donde certifique el monto del giro de los recursos destinados al pago de los subsidios y,
- No reportó al FUT en la categoría de gastos de inversión el compromiso de subsidios.

Pues bien, dado que el recurrente afirmó que reportó en el FUT el compromiso de subsidios, fue necesario remitir el escrito de impugnación al Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio - MVCT, como la autoridad competente para verificar el cumplimiento de este requisito, a través del oficio No. SSPD 20144010211311, del 22 de abril de 2014.

Mediante el documento radicado en esta entidad con el No. SSPD 20145290241642, del 13 de mayo de 2014, el MVCT solicitó que fuera decretado un período probatorio para que el alcalde municipal allegara los siguientes documentos: Ejecución presupuestal de gastos de la vigencia 2012 que contenga la fuente SGP-APSB, y Copia de los CDP y RP expedidos para el pago de subsidios a los prestadores de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo. Por ello, en respuesta al Auto de pruebas No. SSPD 20144010000036, del 16 de mayo de 2013, el municipio de Padilla remitió la información solicitada con el documento radicado en esta entidad con el No. SSPD 20145290292252, el 5 de junio de 2014, la cual fue remitida por esta superintendencia al MVCT con el documento No. SPPD 20144010303191.

El 20 de junio de 2014, con el oficio No. SSPD 20145290325062, el doctor Javier Orlando Moreno Méndez, en su calidad de director de desarrollo Sectorial del MVCT se pronunció de la siguiente manera, respecto a los argumentos del recurrente:

Posición del Ministerio:

Según la ejecución presupuestal de gastos del Municipio con corte diciembre 31 de 2012, se evidencia que existe el rubro 05.4 *"Programa de Agua Potable y Saneamiento Básico"*, el cual presenta una subcuenta con el código 05.4.1.1 denominada "subsidios acueducto EMPADILLA", presentado un presupuesto inicial aprobado por valor de \$44.423.608 y como presupuesto por ejecutar, disponibilidades, obligaciones y pagos registra un valor de \$43.536.368, es decir el rubro se ejecuta en su totalidad.

De otra parte, los certificados de disponibilidades presupuestales y los registros presupuestales adjuntados muestran que fueron expedidos con cargo al rubro 05.4.1.1 hasta agotar el valor disponible y posteriormente se expiden CDP y RP con cargo a rubro recursos propios cuyo fin es atender el pago de subsidios de la vigencia 2012.

Igualmente, revisado el reporte al FUT se observa que el Municipio durante los tres primeros trimestres reporta información de pago de subsidios con cargo a la fuente SGP Última doceava y once doceavas, a excepción del cuarto trimestre.

Así las cosas, una vez constatada la información en físico del municipio se observa que existió pago de subsidios con cargo a la fuente de SGP APSB durante la vigencia 2012.

En consecuencia, se tiene que de acuerdo con la documentación aportada por la Entidad Territorial, el municipio efectivamente comprometió y pagó subsidios con cargo a los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico, razón por la cual se acredita el cumplimiento de los requisitos.

En consecuencia, el criterio objeto de estudio se tiene como cumplido por parte del municipio de Padilla.

4.2. Argumentos expuestos sobre el cumplimiento del requisito relacionado con el equilibrio entre los subsidios y las contribuciones para los servicios públicos domiciliarios.

Frente a este criterio, el recurrente argumenta que el Acuerdo No. 18, del 20 de junio de 2011, por el cual se establecieron los porcentajes de subsidios y contribuciones, fue aplicado para el 2012, de acuerdo a lo señalado en el artículo 5° del mencionado acto administrativo, además que en el 2012 el Concejo Municipal en su autonomía no expidió dicho acto administrativo. Así mismo, señala que el formato "Balance subsidios y contribuciones" no se encontraba habilitado en el SUI para aseo, puesto que dicho servicio no fue objeto de subsidios.

En virtud de lo anterior, se verificó que el municipio de PADILLA reportó en el SUI, el 20 de febrero de 2013, el Acuerdo No. 018 del 20 de junio de 2011, por el cual se adoptó el porcentaje de aportes solidarios y subsidios, tal como se observa a continuación:

ACUERDO N° 018 de 2011 (Junio 20)			
POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN	PORCENTAJES DE		
SUBSIDIOS A USUARIOS DEL SERVICIO	DE ACUEDUCTO,		
ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE PADILLA CAUCA.			

Ahora bien, es necesario advertir que el Acuerdo No. 018 de 2011, no se expidió para la vigencia 2012, pese a que con el recurso el recurrente afirma que estaba vigente para el 2012 y el gerente de la empresa EMPADILLA E.S.P.; lo anterior, debido a que con anterioridad a la expedición de la Ley 1450 de 2011, éste acto debió tramitarse junto con el acuerdo que aprueba el presupuesto del municipio para la vigencia 2012, es decir que debió expedirse a finales del año 2011. Al respecto el numeral 5° del artículo 3° del Decreto 1013 señala:

"Recibida por parte del alcalde municipal o distrital la solicitud o solicitudes de que trata el numeral anterior, procederá a analizarlas y a preparar un proyecto consolidado sobre el particular para ser presentado a discusión y aprobación del concejo municipal o distrital, quien, conjuntamente con la aprobación del presupuesto del respectivo ente territorial, definirá el porcentaje de aporte solidario necesario para solventar dicho faltante, teniendo en consideración prioritariamente los recursos con los que cuenta y puede contar el municipio o distrito en el Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos, con base en las fuentes de recursos para contribuciones señaladas en el artículo 3° del Decreto 849 de 2002 y demás normas concordantes."

Sobre el trámite de aprobación del presupuesto, es necesario advertir que el mismo inicia con la presentación de un proyecto de presupuesto por parte del Alcalde Municipal, el cual está sujeto a las normas generales contenidas en el Código de Régimen Municipal, Ley 136 de 1994 sobre trámite de acuerdos municipales y el Estatuto Orgánico del Presupuesto, en dichas normas se establece que el presupuesto debe ser expedido antes de la finalización de las sesiones ordinarias, es decir, el 30 de noviembre de cada año. Si el Concejo no expidiera el presupuesto general del municipio antes de la media noche del 30 de noviembre del año respectivo, regirá el proyecto presentado por el alcalde, incluyendo las modificaciones que hayan sido aprobadas en el primer debate. Cuando el Concejo no apruebe el proyecto de Presupuesto presentado oportunamente, el alcalde pondrá en vigencia mediante decreto, el proyecto presentado. Así pues, atendiendo las normas que rigen la expedición del presupuesto municipal se puede concluir que el Acuerdo No. 018 de 2011 no surtió trámite conjunto con el de aprobación del presupuesto para la vigencia 2012.

Frente a lo expuesto por el recurrente en relación a que fue aplicado en el 2012, esta superintendencia no comparte el presente argumento, debido a que, los acuerdos de aprobación de subsidios y contribuciones debían ser expedidos anualmente por parte del Concejo Municipal, situación establecida en el artículo 2° del Decreto 1013 de 2005 que señaló: "(...) La presente metodología deberá llevarse a cabo cada año para asegurar que para cada uno de los servicios, el monto total de las diferentes clases de contribuciones sea suficiente para cubrir el monto total de los subsidios que se otorguen en cada Municipio o Distrito por parte del respectivo concejo municipal o distrital, según sea el caso, y se mantenga el equilibrio (...)".

De tal suerte que con el Acuerdo No. 018 de 2011, allegado con el recurso de reposición, no se logra acreditar el criterio en estudio, máxime cuando al revisar la información reportada por el municipio se logra precisar que éste no solventa de manera integral el criterio relacionado con el reporte al SUI del Acuerdo Municipal de aprobación de los porcentajes de subsidio y aporte solidario para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo para la vigencia 2012; obrar de manera diferente sería desconocer que el Decreto 1639 de 2013, que determinó claramente la forma de como acreditarlo, por lo tanto y

ciñendonos al principio de legalidad que debe regir todas las actuaciones administrativas nos imposibilita ordenar su cumplimiento.

Ahora bien, en cuanto al requisito subsidiario para acreditar éste criterio, relacionado con el formato "Balance Subsidios y Contribuciones", revisado el SUI, se encontró que la información fue reportada el 18 de julio de 2013 y en dicho formato el municipio reportó únicamente información de acueducto y alcantarillado. El recurrente afirma que no fue habilitado dicho formato para el servicio de aseo, además que el mismo no es subsidiable, sin embargo, se aclara al recurrente que el formato en mención solo se encuentra habilitado en el tópico administrativo del servicio de acueducto, y allí se reporta la información de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, tal como se encuentra señalado en el numeral 4° del artículo 15.3.3.2 la Resolución No. SSPD 20101300048765 del 2010, así:

4. Servicio. Corresponde al servicio público domiciliario al cual se destinan los recursos de acuerdo con la siguiente clasificación:

CODIGO	SERVICIO
1	Acueducto
2	Alcantarillado
3	Aseo

Señala el recurrente, además, que el servicio de aseo no es objeto de subsidios, pero al revisar el Acuerdo No. 018 de 2011, por el cual los porcentajes de subsidios y contribuciones, que aduce el recurrente aplicó para el 2012, encontrando que en el artículo primero se fijó para el estrato uno, el 30% a subsidiar del cobro del servicio de aseo, así:

SERVICIO DE ASEO	
ESTRATOS	% A SUBSIDIAR
1	30
2	10
3	0

Por ello, no es posible tener como acreditado el criterio objeto de estudio puesto que el municipio no reportó en el formato "Balance subsidios y contribuciones" del 2012, la información solicitada para el servicio de aseo.

No obstante lo antes expuesto, y de acuerdo a lo señalado por el MVCT en el oficio No. SSPD 20145290325062, del 20 de junio de 2013, el municipio cumplió con el reporte en el FUT del pago de los subsidios en la categoría gastos de inversión, tal como se señaló en el numeral anterior, por ello se considera jurídicamente viable tener ésta afirmación, como prueba suficiente para el cumplimiento del presente criterio.

4.3. Argumentos expuestos sobre el cumplimiento del requisito relacionado con el agotamiento del procedimiento previsto en el artículo 6° de la Ley 142 de 1994.

Al respecto, el recurrente afirma que, realizó el procedimiento señalado en el artículo 6 de la Ley 142 de 1994 mediante invitaciones a municipios vecinos, además que el 1 de julio de 2013 inició operaciones la empresa EMPADILLA E.S.P.

Para efectos de determinar cumplimiento de este aspecto se analizará el contenido del artículo 6° de la Ley 142:

"Prestación directa de servicios por parte de los municipios. Los municipios prestarán directamente los servicios públicos de su competencia, cuando las características técnicas y económicas del servicio, y las conveniencias generales lo permitan y aconsejen, lo cual se entenderá que ocurre en los siguientes casos:

6.1. Cuando, habiendo hecho los municipios invitación pública a las empresas de servicios públicos, no haya habido empresa alguna que se ofreciera a prestarlo;

6.2. Cuando, no habiendo empresas que se ofrecieran a prestar el servicio, y habiendo hecho los municipios invitación pública a otros municipios, al Departamento del cual hacen parte, a la Nación y a

otras personas públicas o privadas para organizar una empresa de servicios públicos que lo preste, no haya habido una respuesta adecuada"

Sea lo primero advertir que el Decreto 1639 de 2013, señala en el artículo 5º la manera como el municipio debe acreditar el trámite previsto en el artículo 6º de la Ley 142 de 1994, tal como se transcribe a continuación:

"(i) Reporte al SUI del agotamiento del procedimiento previsto en el artículo 6 de la Ley 142 de 1994 mediante:

1. Invitación pública dirigida a empresas de servicios públicos para que presenten ofertas para la prestación de los servicios públicos (numeral 6.1) y a otros municipios, al departamento, a la Nación y otras personas públicas o privadas, para organizar una empresa de servicios públicos (numeral 6.2).

2. Documento en que conste que se realizó la publicación de las invitaciones establecidas en los numerales 6.1 y 6.2 del artículo 6 de la ley 142 de 1994.

3. Certificación en la que conste que no hubo empresas de servicios públicos o personas públicas o privadas interesadas en la prestación de los servicios ni en la organización de una empresa de servicios públicos en el municipio."

Entonces corresponde al municipio prestador directo al 31 de diciembre de 2012, cargar al SUI las invitaciones, publicaciones y certificados de no presentación de personas interesadas, respecto de los servicios que presta directamente. Por ello, se procede a revisar los documentos reportados el 25 de julio de 2013, por el municipio para acreditar éste criterio, encontrando que solo reportó el siguiente documento:

Padilla- Cauca 24 de julio de 2013

*Señores
Grupo SUI
Grupo CERTIFICACIONES
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios*

En atención a la obligatoriedad que nos asiste en cumplimiento del artículo 40 del decreto 1629 de 2012 de informar a esta entidad sobre el agotamiento del artículo 6º de la ley 142 de 1994, para la definición del prestador del servicio de aseo, me permito hacer la siguiente precisión.

El concejo municipal facultó al alcalde municipal a crear una empresa para la prestación del servicios de acueducto y alcantarillado mediante acuerdo 010 del 15 de mayo de 1997, en atención a dicho mandato se creó una empresa industrial y comercial del estado mediante decreto 047 de 1997, denominada EMPADILLA E.S.P, en atención a que la empresa fue creada por decreto y no estando definida la prestación del servicios de aseo en el mes de febrero de 2012 mediante acuerdo 003 el concejo municipal facultó al alcalde para transferir a la empresa EMPADILLA ESP el servicio de aseo y sus actividades conexas. Con dichas facultades el alcalde inició el proceso de transferencia de los servicios de aseo a la empresa.

Dicho procedimiento se soporta en las consideraciones normativas expuestas por la SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL del CONSEJO DE ESTADO en respuesta a la consulta. Radicación No. N° 1783.

En consecuencia de lo anterior se reportan al Inspector del SUI los actos administrativos correspondientes.

Acuerdo 010 del 15 de mayo de 1997.

Decreto 047 de 1997

Acuerdo 003 de 2012

Decreto 027 de 2013

Acta 001 de 2012

Acta 002 de 2013

En consecuencia, dado que el municipio no reportó las invitaciones, publicaciones y actos de cierre del procedimiento señalado en el artículo 6 de la Ley 142 de 1994, no es posible tener como válidas las afirmaciones del recurrente, puesto que las mismas no desvirtúan el incumplimiento en mención. Además, aunque el recurrente señala que si realizó las invitaciones, no adjuntó los documentos que probaran que sí lo realizó, tal y como era su obligación en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 167 del Código de General del Proceso.

Ahora bien, tampoco acepta este despacho el argumento relacionado con el inicio de operaciones de la empresa EMPADILLA E.S.P., puesto que en virtud de lo establecido en el artículo 6º del Decreto 1639 de 2013, y después de revisado el RUPS se encontró que el municipio de Padilla fue prestador directo del

servicio de aseo al 31 de diciembre de 2012, y por ello debe acreditar el cumplimiento del procedimiento establecido en el artículo 6° de la Ley 142 de 1994.

En consecuencia, se tiene como incumplido éste criterio.

4.4. Argumentos expuestos sobre el cumplimiento del requisito relacionado con el reporte al SUI del formato Acto de Aprobación de Tarifas.

El recurrente señala que tiene tarifa contractual y por ello reportó la aplicación tarifaria en el SUI, por ello no existe una tarifa fija, además aduce que el servicio de aseo es operado por la empresa EMPADILLA E.S.P.

Para realizar el pronunciamiento de los argumentos del recurrente, es necesario en primer lugar, señalar que²:

"En el régimen de los servicios públicos domiciliarios, una tarifa contractual es aquella acordada por las partes (ente territorial o entidad pública y empresa privada), en desarrollo de un proceso de selección de contratistas que culmina con la celebración de un contrato, cuyo objeto es la financiación, operación y mantenimiento de dichos servicios.

Lo anterior, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Parágrafo 1° del Artículo 87 de la Ley 142 de 1994, el cual señala lo siguiente:

"Cuando se celebren contratos mediante invitación pública para que empresas privadas hagan la financiación, operación y mantenimiento de los servicios públicos domiciliarios de que trata esta Ley, la tarifa podrá ser un elemento que se incluya como base para otorgar dichos contratos. Las fórmulas tarifarias, su composición por segmentos, su modificación e indexación que ofrezca el oferente deberán atenderse en un todo a los criterios establecidos en los artículos 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 y 96, de esta Ley. Tanto éstas como aquellas deberán ser parte integral del contrato y la Comisión podrá modificarlas cuando se encuentren abusos de posición dominante, violación al principio de neutralidad, abuso con los usuarios del sistema. Intervendrá asimismo, cuando se presenten las prohibiciones estipuladas en el artículo 98 de esta Ley. Con todo las tarifas y las fórmulas tarifarias podrán ser revisadas por la comisión reguladora respectiva cada cinco (5) años y cuando esta Ley así lo disponga".

De la norma transcrita se puede colegir que el legislador previó la existencia de las tarifas contractuales originadas en los contratos celebrados por el Estado con empresas privadas para la financiación, operación y mantenimiento de los servicios públicos domiciliarios, siempre que se acojan los criterios que orientan el régimen tarifario de los mismos."

Por lo anterior, no es viable tener en cuenta el argumento del recurrente relacionado con la existencia de tarifas contractuales puesto que el municipio al ser prestador directo del servicio de aseo, no podía tener éste régimen tarifario.

Ahora bien, se aclara al recurrente que en los artículos 6.3.3.2., 7.3.3.2. y 8.3.3.5. del Anexo de la Resolución Compilatoria No. 20101300048765, del 14 de diciembre de 2010 *"Por la cual se adiciona un artículo y se modifica el Anexo de la Resolución Compilatoria SSPD 20094000015085 del 11 de junio de 2009"*, se encuentra la obligación de los prestadores de remitir a esta superintendencia a través de la página del SUI, en formato pdf o tif, copia del acto por medio del cual la entidad tarifaria local adopta el estudio de costos y tarifas de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Dicho reporte al SUI se debe realizar cada vez que la autoridad tarifaria local emita el acto de aprobación de tarifas, al día calendario siguiente a su expedición.

Así mismo, ésta obligación también se encuentra establecida, en el parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, sobre el proceso de certificación objeto de este acto administrativo, así: *"Los distritos y municipios están en la obligación de reportar a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios la información requerida."*

En consecuencia, el alcalde municipal de Padilla debía adoptar las tarifas mediante acto administrativo, y reportarlo antes del 30 de agosto de 2013, en el SUI. Dado que ello no ocurrió, no es posible tener como cumplido éste criterio.

4.5. Del recurso de apelación.

2 Concepto de la Oficina Asesora Jurídica de esta Superintendencia No. 535 de 2013.

Es necesario aclararle al recurrente que contra la Resolución No. SSPD 20144010006525, del 13 de marzo de 2014, no procede el recurso de apelación, tal como lo señala el numeral 2, del artículo 74 del C.P.A.C.A., así:

"ARTÍCULO 74. RECURSOS EN LA VÍA GUBERNATIVA. Por regla general, en contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos:

(...)2. El de apelación, ante el inmediato superior administrativo, con el mismo propósito.

No habrá apelación de las decisiones de los Ministros, Directores de Departamento Administrativo, Superintendentes y representantes legales de las entidades descentralizadas ni de los directores u organismos superiores de los órganos constitucionales autónomos." (...) (Subrayado fuera de texto).

Así las cosas, es claro que las decisiones adoptadas por la Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, no están sujetas a ser impugnadas mediante el recurso de Apelación.

Como quiera que, la función de expedir los actos administrativos mediante los cuales se decida sobre la certificación relacionada con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico fue delegada por la Superintendente de Servicios Públicos al Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo mediante la Resolución No. 20111300032265, del 21 de octubre de 2011, las decisiones que expida este funcionario en virtud de estos actos administrativos serán susceptibles solamente del recurso de reposición. Dicha delegación tiene como fundamento los Artículos 9 a 10 de la ley 489 de 1998.

Además, el artículo 12 de la Ley 489 de 1998 dispone que: "Los actos expedidos por las autoridades delegatarias estarán sometidos a los mismos requisitos establecidos para su expedición por la autoridad o entidad delegante y serán susceptibles de los recursos procedentes contra los actos de ellas". Con fundamento en esta norma, se expidió la Resolución de delegación.

Al respecto la Corte Constitucional señaló: "Decisiones del delegatario. El delegatario toma dos tipos de decisiones: unas, para el cumplimiento de las funciones del empleo del cual es titular, y otras, en ejercicio de la competencia delegada, para el cumplimiento de las correspondientes funciones del empleo del delegante. En estricto sentido, es frente a estas últimas que se actúa en calidad de delegatario pues en el primer evento él no es delegatario sino el titular de su empleo. Además, las decisiones que toma en calidad de delegatario tienen el mismo nivel y la misma fuerza vinculante como si la decisión hubiese sido tomada por el delegante y, se asume, "que el delegado es el autor real de las actuaciones que ejecuta en uso de las competencias delegadas, y ante él se elevan las solicitudes y se surten los recursos a que haya lugar, como si él fuera el titular mismo de la función".³

Así mismo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca señaló respecto de este tema:

"Con relación a ese preciso aspecto, es del caso poner de presente que, de conformidad con las disposiciones procedimentales generales contenidas en la Parte Primera del Código Contencioso Administrativo (artículos 1 a 81) y las normas que regulan los procedimientos administrativos especiales, para la procedencia del recurso de apelación se requiere la configuración de dos presupuestos, a saber: a) que exista un funcionario superior jerárquico respecto de aquel que profiere la decisión objeto del recurso, por cuanto, en atención a la naturaleza y esencia del mismo, se requiere se sea conocido y resuelto por una autoridad o funcionario que se encuentre en un nivel jerárquico superior al que emitió la decisión, y b) que la ley no haya prohibido la procedencia de tal recurso.

Desde esa óptica, en el presente caso objeto de examen, es evidente la ausencia del primer presupuesto exigido para la procedencia del recurso de apelación, dado que, en virtud de la delegación efectuada mediante la resolución SSPD 7605 de 23 de mayo de 2002, el Director Territorial Centro de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios investigó y sancionó a la ETB S.A. ESP y materializó la respectiva decisión a través de la expedición de los actos administrativos demandados, actuación en la que obró como si fuese la autoridad delegante, esto es, el mismo Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, funcionario éste que no tiene superior jerárquico.

En tales condiciones, no encuentra esta Sala de Decisión que con la expedición de los actos administrativos demandados, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios haya violado el derecho constitucional fundamental del debido proceso, ya que dio estricta aplicación a las normas procedimentales del régimen de servicios públicos domiciliarios, por cuanto, si bien la decisión en ellos contenida fue expedida por el Director Territorial Centro -funcionario éste que tiene superior jerárquico-, lo hizo en ejercicio de una función delegada por parte del Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, quien dentro de la estructura de dicha entidad no tiene superior jerárquico que resuelva los

3 Corte Constitucional. Sentencia C-372 del 15 de mayo 2002. MP Jaime Córdoba Triviño

recursos de apelación interpuestos contra sus decisión, lo cual hace que no se configuren los presupuestos a los que se ha hecho referencia.

Por consiguiente, en ningún momento se desconocieron las disposiciones contenidas en las normas que regulan los servicios públicos, ya que, con base en el artículo 113 de la ley 142 de 1998, en concordancia con los artículo 12 de la ley 489 de 1998 y 50 del C.C.A., se estableció que contra las decisiones adoptadas por el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios no procede el recurso de apelación; por lo tanto, al haber actuado el Director Territorial Centro en cumplimiento de un acto de delegación emitido por el mismo superintendente, es claro que no procede el recurso de alzada por haber actuado como si fuera tal funcionario".⁴

Así las cosas, en razón a que el Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo es delegatario de funciones, los actos administrativos que dicte son susceptibles únicamente de los recursos que proceden contra las decisiones que profiera el Superintendente (delegante), y que por no tener superior jerárquico, sólo procede el recurso de reposición.

En conclusión, se evidencia que el ente territorial no acreditó el cumplimiento de los criterios que se le demandan; advirtiéndole el cumplimiento de los criterios relacionados con el funcionamiento del FSRI y el equilibrio entre los subsidios y las contribuciones para los servicios públicos domiciliarios; por lo tanto el recurso formulado por el señor ARMANDO MINA MENA, como alcalde municipal de PADILLA, no prospera y en consecuencia la Resolución recurrida se confirma.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- RECHAZAR, por las razones expuestas, el recurso de apelación interpuesto en contra de la Resolución No. SSPD 20144010006525, del 13 de marzo de 2014.

ARTÍCULO SEGUNDO.- CONFIRMAR la Resolución No. SSPD 20144010006525, del 13 de marzo de 2014, proferida por el Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR personalmente de la presente Resolución al alcalde del municipio de PADILLA, del departamento del CAUCA, haciéndole entrega de una copia de la misma, y advirtiéndole que contra ésta no procede recurso alguno. De no ser posible la notificación personal, se debe dar aplicación al artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

ARTÍCULO CUARTO.- COMUNICAR el contenido de la presente Resolución al gobernador del departamento del CAUCA, al Departamento Nacional de Planeación, al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

ARTÍCULO QUINTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria y contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D. C.



JORGE ANDRÉS CARRILLO CARDOSO

Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo

Proyectó: Nubia Stella Duarte Blanco - Contratista Grupo de Certificaciones e Información

Aprobó: Giovanni Bonita Rodríguez - Coordinador Grupo de Certificaciones e Información

Visto Bueno: Samuel Alfonso Forero - Contratista Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo

Ángela López Villegas - Contratista Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo

Expediente: 20094012004590432A